

Aguascalientes, Aguascalientes; a diez de noviembre del dos mil veintiuno.

## SENTENCIA

**VISTOS** para resolver mediante sentencia definitiva los autos del expediente \*\*\*\*\*, relativo al juicio **Ejecutivo Mercantil** promovido por \*\*\*\*\* endosatario en procuración de \*\*\*\*\*, en contra de \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, en ejercicio de la **acción cambiaria directa**, que se dicta al tenor de los siguientes:

### CONSIDERANDOS

**I.-** Dispone el artículo 1324 del Código de Comercio que: "Toda sentencia debe ser fundada en ley y si ni por el sentido natural ni por el espíritu de ésta se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso".

Así mismo, el artículo 1327 del mismo ordenamiento comercial prevé que: "La sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación".

**II.-** Conforme a los criterios doctrinales, la competencia es la porción de jurisdicción que la Ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios; de ella derivan los derechos y obligaciones de las partes de que se ha hecho mérito. Bajo este concepto se puede entender que la competencia presupone la jurisdicción y siendo así, conforme a lo que es dispuesto en el artículo 1090 del Código de Comercio, toda demanda debe interponerse ante Juez competente.

Señalando que el domicilio del demandado se encuentra ubicado en calle \*\*\*\*\*, número ciento dieciocho, del Fraccionamiento \*\*\*\*\* de esta Ciudad de \*\*\*\*\*, donde se llevo a cabo el emplazamiento ordenado al demandado.

Por ende, la competencia de este juzgador se surte en términos de lo que dispone los artículos 1094 fracción I en relación al artículo 1104 fracción I, ambos del Código de Comercio.

**III.-** Se declara procedente la vía ejecutiva mercantil, de conformidad con el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, en el que se establece que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en títulos de crédito, pues en la especie, el documento base de la acción satisface los requisitos del artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para ser considerado como pagaré, mismo que tiene la naturaleza jurídica de título de crédito.

**IV.-** El actor \*\*\*\*\* demandó a \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, por el pago de la cantidad cuatrocientos mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de suerte principal, por el pago de intereses moratorios a razón del cuatro por ciento mensual y por el pago de gastos y costas.

Sustento su acción en el hecho que el día diez de julio del dos mil diecinueve, el demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, suscribió un documento mercantil de los denominados pagares por la cantidad cuatrocientos mil pesos cero centavos moneda nacional, a favor del actor \*\*\*\*\*.

Según lo dijo, en ese documento el ahora demandado se obligo al pago de la suerte principal, con fecha de vencimiento el día diez de agosto del dos mil diecinueve, y que además aceptó el pago de intereses moratorios a razón del cuatro por ciento mensual.

Dijo que no obstante que llegó el vencimiento del documento este no fue pagado a pesar de las múltiples gestiones extrajudiciales que se han realizado.

En fecha doce de marzo del dos mil veintiuno, se llevo a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, quien fue emplazado y requerido de pago, la cual es visible a foja veintinueve de los autos, quien ante el Ministro Ejecutor manifestó que esa no es su firma, ni reconoce el documento y que no tiene dinero para realizar el pago que se le requiere.

Mediante escrito visible a foja treinta y siete de los autos, el demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, contestó la demanda diciendo que en el punto número uno de los hechos que se contesta manifestó que no es verdad que el demandado haya firmado algún pagaré al actor y mucho menos en la fecha que menciona de aceptación y mucho menos la fecha de vencimiento, ya que al carecer la firma del suscriptor y que no proviene de su puño y letra le falta el requisito esencial que se menciona en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, además de que dicho documento no cumple con los requisitos que contiene el citado ordenamiento, por lo tanto esto no puede ser exigible, como ya lo menciono nunca firmó el documento, y desconoce el origen del pagaré, por lo tanto no está obligado a pagarlo.

Además es importante señalar que no tuvo ningún trato comercial o personal con el actor, que supuestamente le suscribió el documento que se encontraba trabajando juntamente con diversas personas desde las ocho de la mañana hasta las once horas con treinta minutos de la noche siendo ya que su horario de trabajo era así de extenso,

por lo que no pudo él firmar ningún tipo de documento en la fecha que dice que se suscribió.

Respecto del punto número dos de los hechos que se contesta dijo que es falso que hubiera pactado alguna fecha de vencimiento ya que ni siquiera firmó, ni es su firma la que obra en él, ni tuvo ninguna negociación comercial o personal con \*\*\*\*\*, si no firmo el documento es obvio que no conviene ningún interés.

Y respecto del punto número tres de los hechos negó que se haya hecho alguna cobranza extrajudicial del documento base de la acción ya que nunca lo firmó ni lo acepto y nunca nadie se presento a cobrárselo sino hasta el día de la diligencia de requerimiento de pago y embargo que fue el día cuatro de abril del dos mil veintiuno.

Opuso como excepciones y defensas la de falta de acción y derecho, la contenida en el artículo 8º fracciones XI (las personales que el demandado tenga contra el actor), II (por no haber firmado el documento), IV (incapacidad del demandado para suscribir el título) y VI (alteración del texto en el documento) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la contenida en el artículo 1403 fracción I del Código de Comercio.

Con dicho escrito de contestación a la demanda, se le dio vista a la parte actora por auto de fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno.

Mediante escrito que es visible a foja cincuenta y cinco de los autos, la parte actora evacuó la vista, diciendo respecto del punto número uno el demandado firmó y aceptó el documento base de la acción en los términos que se encuentra llenado el mismo, firmando el mismo frente a su persona, por lo que es claro que la firma que ahí aparece pertenece al puño y letra del demandado.

Siendo que el demandado se dirige con falsedad ante su Señoría, pues contrario a lo manifestado por éste, además de adeudar al demandado el pagaré base de la acción, el demandado \*\*\*\*\* y su esposa \*\*\*\*\*, celebraron con el actor contrato de Mutuo con Garantía Hipotecaria en esa misma fecha diez de julio del dos mil diecinueve, ante la fe del Licenciado \*\*\*\*\*, Notario Público número \*\*\*\*\* de los del Estado, lo cual consta en la escritura pública número \*\*\*\*\*, volumen \*\*\*\*\* del protocolo de dicha Notaría, documento que exhibe en copia certificada.

Respecto del punto número dos manifestó que el demandado refiere que no tiene ni tuvo ninguna negociación comercial o personal con \*\*\*\*\* y que por esa razón no pactó fecha de vencimiento, que no firmó el documento y que por eso no pactó ningún interés, siendo que en el presente caso \*\*\*\*\* no tiene relación alguna, pues no es parte del presente juicio, ni

testigo de las partes, razón por la que la contestación de este hecho no se refiere al hecho narrado por su parte en el escrito de demanda, siendo que el demandado firmó y aceptó el documento base de la acción con las fechas de suscripción y vencimiento, así como la tasa de interés moratorio ahí señaladas.

Y respecto del punto número tres de los hechos dijo que en términos del artículo 173 último párrafo, el actor no se encuentra obligado a presentar el documento para su protesto.

En los anteriores términos quedó conformada la litis en este procedimiento.

**V.-** Señala el artículo 1194 del Código de Comercio “El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones”.

Así, a juicio de esta autoridad es procedente la vía ejecutiva mercantil intentada en contra del demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, en la medida en que se sustenta en un documento mercantil de los denominados pagarés que reúnen los requisitos para ser considerado como tal en términos del artículo 170 de la Ley General de Títulos de Operaciones y Crédito, toda vez que el documento indica que es un pagaré y que contiene una promesa incondicional de pago a cargo del demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, por la cantidad cuatrocientos mil pesos cero centavos moneda nacional, a favor del actor \*\*\*\*\* , con fecha de vencimiento el día diez de agosto del dos mil diecinueve, habiendo pactado un cuatro por ciento mensual de intereses moratorios.

Luego, este tipo de documentos debe entenderse que resultan prueba preconstituida a favor de la actora, toda vez que contiene en sí mismo el derecho que se ejerce.

Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**“TÍTULOS EJECUTIVOS. EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, primer párrafo y fracción IV, del Código de Comercio, los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, luego constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la actora, es un elemento demostrativo que en sí mismo hace prueba plena, y por ello si el demandado opone una excepción tendiente a destruir la eficacia del título, es a él y no a la actora a quien corresponde la carga de la prueba del hecho en que fundamente su excepción, precisamente en aplicación del

principio contenido en el artículo 1194 de la legislación mercantil invocada, consistente en que, de igual manera que corresponde al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción, toca a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas; y con apoyo en el artículo 1196 de esa codificación, es el demandado que emitió la negativa, el obligado a probar, ya que este último precepto establece que también está obligado a probar el que niega, cuando al hacerlo desconoce la presunción legal que tiene a su favor su colitigante; en ese orden de ideas, la dilación probatoria que se concede en los juicios ejecutivos mercantiles es para que la parte demandada acredite sus excepciones o defensas, además, para que el actor destruya las excepciones o defensas opuestas, o la acción no quede destruida con aquella prueba ofrecida por su contrario”. Época: Octava Época, Registro: 215748, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 596.

Así las cosas, correspondía a la parte demandada acreditar sus excepciones, concretamente que el documento base de la acción esta alterado, por no haberlo firmado ni haberse obligado cambiariamente, que el documento no cumple con los requisitos para ser considerado un título de crédito así como las que invoco que ampara el artículo 8° de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito.

Cobra también aplicación la tesis de jurisprudencia definida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que a continuación se cita:

**“PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA.** -El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor”. Época: Octava Época, Registro: 225165, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1990, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 593.

El demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, ofreció como prueba de su parte la confesional, a cargo de \*\*\*\*\* , veinte de octubre del dos mil veintiuno, al tenor del pliego de posiciones que es visible a foja ochenta y seis de los autos, habiendo negado las posiciones primera, tercera, cuarta, quinta y sexta que fueron calificadas de legales; así mismo, negó la posición primera y afirmó las posiciones segunda y tercera que le fueron formuladas verbalmente y calificadas de legales, es decir, que el especio relativo a la cantidad con letra y número fue llenado por persona distinta a \*\*\*\*\* así como lo relativo al interés moratorio.

Sin embargo, no obstante que se confesaron estas afirmaciones, debe decirse que no logra desvirtuar el contenido del documento base de la

acción en la medida que tendría que haberse demostrado que ese llenado del documento se hizo en un momento posterior al que se estampó la firma de aceptación.

Para tal efecto también ofreció la parte demandada como prueba la pericial en materia de grafoscopia y documentoscopia, respecto de la cual se decreto la no admisión de la prueba pericial en audiencia de fecha veinte de octubre del dos mil veintiuno.

Consecuentemente, debe concluirse que las excepciones planteadas por la parte demandada no quedaron acreditadas con las pruebas.

Por el contrario, las pruebas que aportó la parte actora son suficientes para tener por acreditada la procedencia de la acción cambiaria directa.

La parte actora ofreció como prueba la documental privada, consistente en el documento base de la acción, mismo que como ya se ha dicho es prueba preconstituida a favor de la accionante, y por ende demuestra en sí mismo la existencia de la obligación así como la exigibilidad de su cumplimiento.

También ofreció la parte actora ofreció como prueba de su parte la documental, consistente en las copias certificadas de la escritura número treinta y seis mil doscientos setenta y cuatro, volumen mil veintisiete, que obran de la foja cincuenta y nueve a la sesenta y uno de los autos, la cual fue desahogada en audiencia de fecha veinte de octubre del dos mil veintiuno. Esta prueba no aporta ningún elemento de convicción en relación a los hechos controvertidos en atención a que se refiere a un contrato de crédito con garantía hipotecaria que no es base de la acción e incluso aun considerando que el pagaré se hubiese firmado con motivo de ese crédito, el documento es autónomo, de ahí que no aporte ningún elemento de convicción en relación a los hechos controvertidos.

Por otro lado, la parte actora ofreció como prueba de su parte la confesional, a cargo de \*\*\*\*\*, la cual fue desahogada en audiencia de fecha veinte de octubre del dos mil veintiuno, al tenor del pliego de posiciones que es visible a foja ochenta y tres de los autos, negando las posiciones primera, segunda, tercera y cuarta las cuales fueron calificadas de legales. Por lo tanto, no aporta ningún elemento de convicción en relación a los hechos controvertidos.

También ofreció la parte actora como prueba la instrumental de actuaciones, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual es visible a foja veintinueve de los autos, en fecha doce de marzo de mayo del dos mil veintiuno, se emplazo al demandado

\*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, quien ante el Ministro Ejecutor manifestó que esa no es su firma, ni reconoce el documento y que no tenía dinero para realizar el pago que se le requirió.

Lo que demuestra en esa diligencia en términos del artículo 1294 del Código de Comercio, es que no obstante que se hizo el legal requerimiento de pago este no tuvo verificativo y por ende la suerte principal reclamada permanece insoluta.

Finalmente, la parte actora ofreció la prueba presuncional que a juicio de esta autoridad favorece a la parte actora en términos de lo que establece el artículo 129 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, toda vez que ese precepto legal establece que la entrega del documento debe ser precisamente contra su entrega de lo que se sigue que si la parte actora tiene en su poder el documento base de la acción y exige su pago esto es en función de que el documento no ha sido pagado.

En las anteriores circunstancias debe considerarse que se actualiza lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que señala: "La acción cambiaria se ejercita ...II.- En caso de falta de pago o de pago parcial;...".

De esta manera y con fundamento en dicho precepto legal se condena al demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, al pago de la cantidad cuatrocientos mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de saldo insoluto de la suerte principal.

**En cuanto a los intereses moratorios.**

La parte actora reclama el pago de intereses moratorios a razón del cuatro por ciento mensual sobre la suerte principal.

Este interés se considera un interés usurario en la medida en que sobrepasa los límites que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha considerado para ello, al tenor de la tesis de jurisprudencia, cuyo texto y rubro es el siguiente:

**"INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**- Conforme a la tesis de este órgano colegiado de rubro: "INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO QUE PERMITE SU PAGO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3 DE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima

Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1735, es necesario establecer cuándo un rédito puede considerarse usurario, esto es, que transgrede los límites de lo ordinario o lícito. Así, atento a que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ni el Código de Comercio prevén un límite para el pacto de intereses en caso de mora, es válido -de acuerdo a la supletoriedad de la codificación mercantil del Código Civil Federal- remitirnos, en primera instancia, al artículo 2395 de la indicada legislación sustantiva civil federal; sin embargo, de su lectura se advierte que prevé la reducción de los réditos, bajo la justificación en el juicio de la figura jurídica de la lesión, sin hacer referencia a intereses usurarios ni fijar un porcentaje en tal sentido. Por tanto, al tratarse la usura de un acto motivo de represión por las legislaciones penales, se destaca que el Código Penal Federal, en sus artículos 386 y 387, fracción VIII, prevén como usura la estipulación de intereses superiores a los "usuales en el mercado"; no obstante, debe observarse que la banca presta diversidad de servicios financieros, además de que el interés varía, de acuerdo al producto, y que los porcentajes anuales que cobran las instituciones financieras por réditos son extremosos, entre los más bajos y altos en su cobro; de ahí que el elemento del cuerpo del delito de fraude por usura, a que se refiere el mencionado artículo 387, fracción VIII, del Código Penal Federal de "intereses superiores a los usuales en el mercado", se torne abstracto o impreciso para dar seguridad al gobernado de cuándo estará en condiciones de alegar que, en caso del cobro de un título y de la realización de operaciones de crédito, existe usura en el cobro de intereses moratorios. Ello es así, porque el Alto Tribunal ha sentado criterio en la tesis P. LXIX/2011 (9a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, de rubro: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.", que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. Por tanto, atento al contenido de dicho criterio, en lo tocante a la interpretación de las normas positivas de derecho interno, se considera que una ley más acorde para la protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que conmina a la prohibición en ley de la usura- es la Legislación Penal para el Estado de



Aguascalientes, norma positiva que si bien no es federal, sí permite fijar un porcentaje certero y eficaz para la salvaguarda del derecho humano en comento, al disponer en su artículo 48, fracción I, que ello sucede cuando un interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete por ciento anual; de ahí que, para estar en condiciones de resolver si un rédito es usurario, es válida la remisión a dicha legislación estatal; máxime cuando las partes en la suscripción del título de crédito señalaron como lugar de pago la entidad de Aguascalientes, lo que, a la postre otorgó competencia a la responsable para conocer de la contienda en términos del artículo 1104, fracción I, de la codificación mercantil”. Época: Décima Época, Registro: 2001360, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXX.1o.3 C (10a.), Página: 1734.

De tal manera que el interés pactado en el documento fundatorio de la acción, representa anualmente un interés del cuarenta y ocho por ciento, lo que evidentemente excede del treinta y siete por ciento anual a que se refiere la tesis supracitada.

Consecuentemente, este Juzgador está obligado a realizar un ejercicio de control de la convencionalidad a efecto de no vulnerar los derechos humanos de la parte demandada, lo que debe hacerse aun incluso cuando, la parte demandada no hubiese opuesto excepción o defensa al respecto, así se desprende de la jurisprudencia definida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente:

**“PAGARÉ. AUN CUANDO EL JUICIO SE SIGA EN REBELDÍA, EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER Y GARANTIZAR OFICIOSAMENTE EL DERECHO HUMANO DEL ENJUICIADO A NO SUFRIR USURA.-** En la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 402, de título y subtítulo: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si el juzgador advierte que la tasa de intereses consignada en un pagaré es notoriamente excesiva, puede reducirla oficiosamente y prudencialmente, valorando las circunstancias particulares del caso y las actuaciones que tenga para resolver. Asimismo, enunció los siguientes parámetros guía para evaluar

objetivamente el carácter excesivo del rédito: a) el tipo de relación entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto; e) el plazo; f) la existencia de garantías para el pago; g) las tasas bancarias de interés para operaciones similares a las analizadas; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Ahora bien, la falta de contestación de la demanda no constituye un impedimento jurídico para analizar los referidos parámetros, porque, aunque el juicio se siga en rebeldía, el juzgador tiene la facultad y la obligación de proteger y garantizar oficiosamente el derecho humano del enjuiciado a no sufrir usura, de conformidad con los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la falta de contestación de la demanda tampoco es un obstáculo práctico para que el juzgador conozca algunos de los referidos parámetros, pues aquellos que consistan en circunstancias particulares del caso (relación entre las partes; calidad de los sujetos; actividad del acreedor; destino, monto, plazo y garantías del crédito), pueden quedar revelados a través de los datos contenidos en la demanda y sus anexos, mientras que los relativos a indicadores financieros (tasas de interés bancarias y variación del índice inflacionario nacional), pueden constituir hechos notorios que no requieren de planteamientos ni pruebas de las partes, por encontrarse difundidos mediante publicaciones impresas o electrónicas oficiales”. Época: Décima Época, Registro: 2010893, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: XXVII.3o. J/30 (10a.), Página: 3054.

Bajo esa óptica, este Juzgador debe regular el monto de los intereses moratorios para ajustarlos al marco Constitucional y Convencional en que impera la Protección a los Derechos Humanos.

Así las cosas, este Juzgador concluye que un interés moratorio que exceda del treinta y siete por ciento anual se encuentra en lo que puede considerarse un interés usurario y por ende debe regularse hasta ese límite, a efecto de armonizar no solo los numerales constitucionales y convencionales ya citados, sino además el diverso artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones y Crédito.

Por tanto, este Juzgador determina regular los intereses a cargo de la demandada a un treinta y siete por ciento anual, es decir, un interés

mensual del tres punto cero ocho por ciento; mismo que debe considerarse que se causa a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento del documento fundatorio de la acción, deberá cuantificarse a partir del día once de agosto del dos mil diecinueve y hasta el pago total de la suerte principal, previa regulación que de ello se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

**En cuanto a los gastos y costas que reclama la parte actora.**

Es impropio condenar al demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, al pago de gastos y costas en este juicio, en la medida en que aún y cuando resulto procedente la vía ejecutiva mercantil y la acción cambiaria directa intentada por la parte actora y se condenó a la deudora al pago del saldo insoluto de la suerte principal reclamada, este Juzgador oficiosamente ha determinado la reducción de los intereses moratorios que habían sido reclamados y de ahí que la parte actora no está obteniendo un fallo favorable total a todas sus pretensiones, sin que resulte relevante que la parte demandada no haya contestado la demanda o se haya opuesto al cobro de tales intereses o no haya acreditado sus excepciones y defensas.

Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia definida por contradicción de tesis emitida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente:

**“COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN LOS CASOS EN QUE, AUN CUANDO PROCEDA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, EL JUEZ OFICIOSAMENTE REDUCE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR CONSIDERARLOS USURARIOS, SIN QUE SEA RELEVANTE QUE EL DEMANDADO HAYA COMPARECIDO O NO AL JUICIO.-**

Del precepto citado, se advierte que siempre se condenará en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término "condenado en juicio" alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión "no obtiene sentencia favorable" se refiere a la derrota o condena total, es decir, absoluta. En ese sentido, cuando en un juicio ejecutivo mercantil, la parte actora se beneficia de la procedencia de la acción cambiaria directa y, en su caso, demás prestaciones reclamadas, exactamente en los mismos términos en que fueron planteadas en la demanda, procede la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues se está ante una condena total. Ahora bien, cuando en la sentencia respectiva el juez, de manera oficiosa, reduce el monto de la suerte principal o de las prestaciones accesorias

reclamadas, se está ante una condena parcial, pues se justificó la intervención judicial y puede considerarse que el actor no obtuvo plenamente una sentencia favorable, ni el demandado fue totalmente derrotado, ya que este último, con la reducción del monto a pagar con respecto a lo reclamado, obtuvo también una sentencia favorable. Así, si en un juicio ejecutivo mercantil, aun cuando procedió la acción cambiaria directa, el juez, en ejercicio del control convencional ex officio, reduce el pago de los intereses moratorios por considerarlos usurarios, no puede condenarse al pago de costas conforme al precepto legal citado, toda vez que la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó y al no tener que pagar el demandado la totalidad de la cantidad que se le reclamaba por concepto de intereses, sin que sea relevante que comparezca a juicio o no el demandado, pues aun si éste no contestó la demanda, debe entenderse que la actuación del juzgador constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. No obstante, este criterio sólo es aplicable en lo que se refiere a la improcedencia de la condena en costas en términos del artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, pues es posible que se den condiciones que activen la procedencia en términos de una diversa fracción del propio precepto, de su primer párrafo, o del artículo 1082 del citado ordenamiento, quedando al prudente arbitrio del juzgador determinar lo procedente".

Época: Décima Época, Registro: 2015691, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 01 de diciembre de 2017 10:13 h, Materia(s): (Civil), Tesis: 1a./J. 73/2017 (10a.).

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1321, 1322, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1346 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, es de resolverse y se resuelve:

**PRIMERO.-** Es competente el suscrito Juez para conocer del presente juicio.

**SEGUNDO.-** Es procedente la Vía Ejecutiva Mercantil.

**TERCERO.-** El actor \*\*\*\*\* acreditó la acción cambiaria directa que instó y la procedencia parcial de las prestaciones que reclama; en tanto que el demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, contestó la demanda y no acreditó sus excepciones y defensas.

**CUARTO.-** Se condena al demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, a pagar al actor \*\*\*\*\* la cantidad cuatrocientos mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de la suerte principal.

**QUINTO.-** Se condena al demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, al pago de intereses moratorios a razón del tres punto

cero ocho por ciento mensual sobre la cantidad cuatrocientos mil pesos cero centavos moneda nacional, a partir del once de agosto del dos mil diecinueve y hasta el pago total de lo reclamado, previa regulación que se haga en la correspondiente etapa de ejecución de sentencia.

**SEXTO.-** Se absuelve al demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, al pago de gastos y costas a favor del actor \*\*\*\*\*.

**SÉPTIMO.-** Sáquese a remate el bien inmueble descrito en la diligencia de embargo de fecha doce de marzo del dos mil veintiuno, y con su producto hágase pago al actor \*\*\*\*\* , si el demandado \*\*\*\*\* en su carácter de deudor principal, no diere cumplimiento voluntario con esta sentencia dentro del término de ley.

**OCTAVO.-** En términos de lo previsto en el artículo 73 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día trece de agosto del dos mil veinte se ordena se proceda a la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia siguiendo lo establecido en los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Sentencias y Resoluciones dictadas por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

**NOVENO.-** Notifíquese y cúmplase.

**A S Í,** definitivamente lo sentenció y firma el licenciado **Juan Sergio Villalobos Cárdenas**, en su carácter de Juez Cuarto Mercantil del Estado; ante la Secretaria de Acuerdos, Licenciada **Rebeca Janeth Guzmán Silva**, con quien actúa.- Doy fe.-

LIC. JUAN SERGIO VILLALOBOS CÁRDENAS  
JUEZ

LIC. REBECA JANETH GUZMÁN SILVA  
SECRETARIA DE ACUERDOS

La resolución que antecede se notifica a las partes del proceso por estrados del Juzgado donde se fija la Lista de Acuerdos en fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, en términos de lo que establece el artículo 1068 fracción III del Código de Comercio en vigor.- Conste.

L'JSVC/tgr

*La Licenciada **Rebeca Janeth Guzmán Silva** Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia definitiva del expediente **3509/2020** dictada en **diez de noviembre del dos mil veintiuno** por el C. Juez Cuarto de lo Mercantil, conste de **trece** fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3 fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se suprimió: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios y demás datos generales, así como nombres o datos de identificación de personas físicas o empresas y cuya intervención fue necesaria en este procedimiento información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizárselo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.*